

Al contestar refiérase
al oficio N° **986**

29 de enero del 2026
DJ-0190

Señora
Yorleny Emilia Blanco Cortés
Administración Contratos ZME
Dirección Entrega y Aseguramiento del Servicio
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Ce: YBlanco@ice.go.cr

Estimada señora:

Asunto: *Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Falta de competencia del órgano contralor y caso concreto.*

Se refiere este despacho a su correo electrónico de fecha 22 de enero de 2026, mediante el cual formula una serie de consultas relacionadas a la presentación de estructuras de precios desglosados de oferentes en procesos licitatorios.

En atención a lo planteado, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n° 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor en el ámbito de sus competencias, atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados contemplados en el inciso b) del artículo 4, de la indicada ley.

Al respecto, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República, citando en lo de interés:

“Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. *Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:*

1. ***Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.*** (...)” (El destacado es nuestro).
2. ***Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.*** (...)

De lo expuesto se desprende con claridad que la consulta, en los términos planteados, no cumple con los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor por las razones que de seguido se exponen.

De conformidad con el inciso 1) del artículo 8 del Reglamento supra mencionado, las consultas sometidas ante este órgano contralor deben versar sobre aspectos que se encuentren dentro del ámbito de las competencias constitucionales y legales asignadas a esta Contraloría General; es decir, tiene que existir alguna relación con la Hacienda Pública y sus deberes y atribuciones de control y fiscalización.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), n.º 9986, se materializa un cambio esencial en la gobernanza de las compras públicas del país, al crear un órgano rector a nivel de toda la administración pública en esa materia, la Autoridad de Contratación Pública. Además, crea un órgano ejecutor de dicha Autoridad, la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, a la que asigna, como parte de sus atribuciones, la función consultiva que oriente las decisiones de las Administraciones gestoras de compras públicas, según se trate de la Administración Central o Descentralizada.

Por otra parte, debe observarse que lo planteado son interrogantes puntuales a raíz de hallazgos detectados en las estructuras de precios recibidas en licitaciones por concepto de servicio de instalaciones en la red de telecomunicaciones; aportando cuadros con detalle de montos, omisiones y consultando particularmente sobre rubros contemplados o no en el presupuesto desglosado, entre otros. De lo expuesto se desprende con claridad que la consulta en los términos planteados, no cumple con los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor por tratarse de un caso concreto en el que se solicita criterio para determinar una serie de aspectos que atañen directamente al ámbito de decisión de la administración consultante.

Resolver lo que se plantea implicaría para este órgano contralor adoptar, con carácter vinculante, decisiones particulares que no corresponden mediante el ejercicio de

la potestad consultiva, además que las orientaciones solicitadas, hacen referencia a temas que ahora corresponde conocer al Ministerio de Hacienda.

Por lo anterior, no corresponde al órgano contralor pronunciarse sobre los temas señalados, lo anterior sin perjuicio de las atribuciones asignadas constitucional y legalmente, con relación a la vigilancia superior de la Hacienda Pública, en razón de lo cual se encuentra facultada para realizar todas aquellas funciones fiscalizadoras que estime pertinentes respecto de los sujetos pasivos, conforme al marco de legalidad y los criterios técnicos correspondientes.

De lo anterior se concluye que al incumplir su consulta con el requisito establecido en los incisos 1) y 2) del numeral 8 del citado Reglamento resulta inadmisibile y, atendiendo a lo establecido en el artículo 9¹ de la misma normativa, se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite.

Finalmente, les informamos que la Contraloría se encuentra en un proceso de mejora continua para ofrecer productos y servicios de calidad, implementando procesos ágiles, flexibles y centrados en el cliente. Por esta razón, pone a disposición un medio sencillo para la presentación de documentos, que será el medio oficial de correspondencia ante la institución en el corto plazo. Puede acceder a este medio en el siguiente enlace: [Presentación de documentos](#). Les invitamos a utilizarlo para enviar sus comentarios y observaciones a la citada propuesta de reforma.

Atentamente,

 Firmado
digitalmente
Valide las firmas digitales

Luis Alonso Richmond Portugal
Fiscalizador, División Jurídica
Contraloría General de la República

LARP/gcc
Ni: 1279-2026.
G: 2026000933-1.

¹ En lo de interés se establece: “Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca en el caso de la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del representante legal en caso de sujetos privados, aquellas cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que no están legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este reglamento(...)”.